

# ACTUALIDAD

C.  
elCOLOMBIANO

ADMINISTRACIÓN INFORME

## Así se hace el lobby (legalmente) en Colombia

Existe una figura de cabildeo y hablamos con el único que ejerce esta tarea en Medellín.

Por JULIÁN AMOROCHO BECERRA

En los últimos dos años, grandes escándalos de corrupción como Odebrecht han tenido como protagonistas a intermediarios entre empresarios y Gobierno, que han servido de puente para enriquecer a los involucrados a costa de los bolsillos del Estado. Por lo general se trata de congresistas en ejercicio, retirados o personas con relaciones políticas de “alto nivel”.

Aparecen entonces los nombres de *Bernardo “Ñoño” Elías* u *Otto Bula*, *Eduardo Zambrano* o *Roberto Prieto*, a quienes la Fiscalía los acusa de presuntamente haberse enriquecido al construir puentes lucrativos y poco transparente ante el Gobierno y grandes compañías.

Sin embargo, en las sombras de esa gran ola en la que se convirtió la corrupción existen personas que se dedican a tender esos puentes de forma legal. Su oficio está consagrado en una resolución olvidada en la Cámara de Representantes, es el único salvavidas que los mantiene a flote.

Uno de ellos es *Julio César Leal Duque*, de cuna en Manizales, pero arraigo en Medellín. Se precia de ser el único cabildero registrado en la ciudad, aunque tal distinción tenga un sabor agri dulce que él mismo reconoce “ante la mala reputación” de su oficio.

“El lobby sí es legal en Colombia -insiste a lo largo de la conversación-, está regulado por la Cámara de Representantes”, comenta, “lo que sucede es que ese intermediario debe surtir un proceso ante los congresistas para poner en conocimiento los intereses de

66 OPINIÓN

VISIBILIZAR SE HACE NECESARIO

JORGE IVÁN CUERVO  
Analista político

Necesario sí es. Es bueno saber hasta dónde va el lobby, que las firmas se conozcan, conozcan sus miembros, visibilizar conflictos de interés y restringir la puerta giratoria. Pero hay que tener cuidado. Un lobista no puede intervenir en procesos de contratación, ni puede incidir en a quién contratar.

determinado grupo para proponer leyes o modificaciones”.

Esa es la función de los denominados lobistas: buscar que los sectores que representan no se vean afectados por el contenido de las leyes que se tramitan en el Congreso, en especial, si se trata de asuntos tributarios. No solo sucede en Colombia, en otros países es legal, hay registro y es un trabajo bien remunerado. Por ejemplo, en Estados Unidos.

Julio tiene una empresa que realiza asesorías en temas tributarios y aduaneros. Dice que el cabildeo está en peligro de extinción. Vive en Medellín y no en Bogotá, porque los congresistas solo trabajan un par de días a la semana y, asegura, “para eso existen los aviones”.

Al indagarle por la diferencia entre lo que él hace en comparación con los nombrados en escándalos de corrupción, enfatiza en que primero se debe estudiar con seriedad qué se pretende modificar, porque, aunque admite que su labor busca beneficiar

a grupos económicos, “las leyes no se pueden ajustar para afectar al resto de la comunidad. Deben ser razonables”.

¿Dónde existe?

Le sorprende que funcionarios y congresistas hablen de regular el cabildeo como un descubrimiento. De hecho, el pasado 14 de septiembre, la vicepresidenta *Marta Lucía Ramírez*, presentó ante la Mesa Técnica Anticorrupción un proyecto de ley que consiste justamente en crear un Registro Público de Cabilderos.

El 20 de ese mismo mes, la ministra del Interior, *Nancy Patricia Gutiérrez*, recalcó que el proyecto para regularlo “se ha presentado antes, pero siempre ha fracasado” y resaltó la voluntad interpartidista de sacarlo adelante.

El cabildeo que ejerce Julio

y otro puñado de personas más existe desde agosto de 2011, cuando la Cámara de Representantes dejó en firme la resolución 2348 con la que se creó el Registro Público. Este documento indica las disposiciones para crear un registro de personas habilitadas para interlocutar ante los representantes por los intereses de algún sector.

Con la firma del entonces presidente de la corporación, *Simón Gaviria*, se puso en marcha el mecanismo con el que se generó la lista -disponible en la página web de la Cámara- y a quienes se les dio un documento con la designación.

Según la resolución, la lista se deberá renovar en cada legislatura. Para el cuatrenio 2010-2014, terminaron registrándose 152 cabilderos (la mayoría representantes de gre-

mios y firmas de abogados), entre 2014-2018 la lista se redujo a 24 nombres.

Aunque Julio César está seguro que es por culpa de quienes arreglan por debajo de cuerda que se ha reducido esta labor, pero, para *Jaime Alberto Carrión*, politólogo y experto en temas políticos de la U. de Medellín, el tema pasa por el escaso alcance de la norma.

“Esa identificación funcionaría para facilitar el acceso a la corporación y para regular quién entra o sale, pero no contribuye a que el cabildeo tenga una regulación que permita como sociedad medir sus alcances, establecer qué función tendría y qué provecho puede sacar de esta actividad”.

En lo mismo coincide el constitucionalista *Juan Manuel Charry*: “Mientras tenga vigencia, esa resolución es vinculante, pero solo para la Cámara y no tiene peso de ley, porque son órganos autónomos con el Senado”.

En ese sentido, el proyecto de la Vicepresidenta *Marta Lucía Ramírez* tiene más dientes. Pone el Registro de Cabilderos a ser administrado por la Pro-



Este el documento oficial que registra a los cabilderos de la Cámara. FOTO CORTESÍA

PARÉNTESIS

EL EJEMPLO DE ESTADOS UNIDOS

El principal ejemplo de cabildeo al que se refieren los congresistas en Colombia es el de Estados Unidos. Allí, la actividad está protegida por la Constitución gracias a la Primera Enmienda. Por ley deben registrarse y su trabajo pasa más allá de la presión al congresista, pues deben presentar estudios y

soportes fuertes para cada cambio. Según Daniel Botero, abogado experto en contratación pública, en Estados Unidos funciona el sistema por el nivel de organización, pues los representantes de gremios designan un delegado ante la clase política y negocian sus intereses por encima de la mesa. “Aquí en Colombia, sería

formalizar un asunto, pero por nuestra idiosincracia, creo que sería totalmente ineficiente”, dijo y explicó que “en nuestro Congreso no se manejan de frente las cosas. Aquí hay muchos intereses particulares que harían imposible regular la actividad. Terminaría siendo otra pieza más de papel”.